ASESORÍAS EN REPARTICIONES GUBERNAMENTALES

Sesión 2ª, celebrada en miércoles 12 de septiembre de 2007,
de 11.04 a 13.07 horas.

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

Preside el diputado señor Marcelo Díaz.

Asisten la diputada señora Adriana Muñoz y los diputados señores Sergio Bobadilla, Guillermo Ceroni, Eduardo Díaz, Marcos Espinosa, Felipe Salaberry, Roberto Sepúlveda, Alfonso Vargas y Felipe Ward.

Además, concurren como invitados los señores Arturo Sandoval, presidente de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares de Gendarmería de Chile, Adiptgen; Juan Marechal, sargento segundo; Juan Alarcón, sargento segundo; Juan Rivas, cabo primero, y Ricardo Navarro, sargento primero, presidente, secretario, tesorero y primer director, respectivamente, de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería de Chile, Ansog, y Cristian Alvear y Germán Aguirre, presidente y primer director, respectivamente, de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios, Anop.

TEXTO DEL DEBATE

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.

El acta correspondiente a la sesión constitutiva queda aprobada por no haber sido objeto de observaciones.

El señor Secretario va a dar lectura a la Cuenta.

El señor HERRERA (Abogado ayudante) da lectura a la Cuenta.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- En cuanto a la petición hecha por la abogada procuradora fiscal del Consejo de Defensa del Estado, señora María Teresa Muñoz, en el sentido de que se le informe sobre el avance de la investigación de esta Comisión en materia de intereses fiscales comprometidos, pido a la Secretaría que adopte las medidas necesarias para los efectos de que se le remitan los antecedentes respectivos y ejerza las acciones que correspondan.

En segundo lugar, soy partidario de establecer un nuevo plazo para la entrega de propuestas de invitados. En consecuencia, sigue abierta la posibilidad para que todos propongan nuevos nombres.

En tercer lugar, me parece que la tarea inmediata de esta Comisión es establecer hechos, hacer un diagnóstico claro de ellos y, en la medida en que avancemos en tal cometido, invitar a las personas que nos puedan dar claridad sobre los asuntos en cuestión.

Tiene la palabra el diputado señor Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, en primer lugar, pido su autorización para que ingrese a la Sala el señor Jaime Barrientos, abogado asesor de la Alianza por Chile, y, además, para que pueda asistir a todas las sesiones de la Comisión.

En segundo lugar, la solicitud de enviar a la Sala una petición para constituir esta Comisión Investigadora nace a raíz de supuestas irregularidades en las asesorías que se habrían prestado a Gendarmería. Tenemos dudas de que se hayan realizado y, de haberse prestado, sobre su utilidad para esta institución, dependiente del Ministerio de Justicia. Por eso, esperamos a que esta Comisión se constituyera para solicitarle, señor Presidente, oficiar al ministro de Justicia o a quien la Comisión resuelva, a fin de que se nos entreguen los informes trimestrales que debían efectuar las personas contratadas a honorarios en virtud de los contratos, desde el año 2000 a la fecha. Esto va a ser muy importante para dilucidar si las asesorías se prestaron, y si así fue, determinar el grado de utilidad, el nivel de impacto que tuvieron en Gendarmería. En definitiva, para certificar o desmentir la existencia de irregularidades en las supuestas asesorías realizadas a esta Institución.

Señor Presidente, por las razones expuestas, pido el acuerdo de la Comisión para oficiar en este sentido.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, para ordenar el tema, primero es importante que nos informe quiénes fueron contratados para prestar asesorías y, sobre la base de esta información, pedir los antecedentes que entregaron sobre su trabajo.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Felipe Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, esos antecedentes están. Existe información, desde 1990 a la fecha,

correspondiente al período de gobierno de la Concertación, sobre todas las personas, a contrata y honorarios, que realizaron trabajos de asesorías, no sólo en Gendarmería, sino también en el resto de las instituciones que dependen de Justicia. Está en poder nuestro y la vamos a entregar a la Comisión en la medida en que la vayamos digitalizar, o si quiere la entregamos toda de una vez. Como dije, la información está, desde 1990 a la fecha, período correspondiente al gobierno de la Concertación, como se pidió en el oficio respectivo hace algunos meses. Por eso después solicitamos la información en relación con los informes trimestrales, a pesar de que esperamos hasta este momento para solicitarla en forma oficial al Ministerio de Justicia. De hecho, sabemos quiénes prestaron asesorías, en virtud de la información que entregó la Subsecretaría de Justicia.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- En primer lugar, debemos resolver la solicitud del diputado Ward en cuanto al ingreso de un asesor a esta sesión.

El señor CERONI.- Señor Presidente, hagámoslo extensivo a cualquier otro asesor por cada una de las bancadas.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para ello?

Acordado.

En segundo lugar, pido al diputado Ward que oficialice los antecedentes, de manera que todos los señores diputados tengan la misma información porque, si uno revisa el mandato acordado por la Sala, la investigación encargada a esta Comisión es bastante amplia. En ese sentido, uno podría pedir información no sólo respecto de las contrataciones hechas por el Ministerio de Justicia, sino también por las que haya realizado, por ejemplo, el seremi de Hacienda de la Primera Región. Es cierto que es por un foco particularmente en las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia. Pero, es importante tener claro que la petición establece un mandato bastante más amplio.

Por lo tanto, independientemente de digitalizar la información, pido al diputado Ward que entregue todos los antecedentes sobre la materia, a fin de que los señores diputados tengan la posibilidad de contar con información homogénea y a partir de ella emitir juicios y formular consultas.

En tercer lugar, no tengo problema en que se envíe el oficio, particularmente si los contratos están.

¿Habría acuerdo para obrar en tal sentido?

Acordado.

En esta oportunidad, hemos invitado a los representantes de las cuatro asociaciones de funcionarios existentes en Gendarmería de Chile.

Señor Secretario, por favor, hágalos ingresar.

-Ingresan a la Sala los invitados.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- En nombre de la Comisión, les doy la bienvenida.

En primer lugar, tiene la palabra el señor Juan Marechal.

El señor MARECHAL.- Señor Presidente, soy presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería de Chile. Nuestra asociación comenzó a funcionar el año pasado, a raíz de la disconformidad que tenía el personal de planta de la institución, debido a la falta de una política penitenciaria durante el último tiempo.

En Gendarmería somos alrededor de 12 a 13 mil funcionarios, de los cuales 9.199 pertenecemos a la planta 2 de Gendarmería de Chile, que es el segmento que representamos.

Hemos tenido serios problemas al interior de la institución y, en la actualidad, estamos enfrentando una crisis a raíz de que en 1995, al implementarse la reforma procesal penal en Santiago, comenzamos a tener un crecimiento explosivo de la población penal. Además, comenzó el trabajo en las nuevas unidades concesionadas y el año pasado se implementó la ley de responsabilidad juvenil. Lamentablemente, nuestro servicio no cuenta con medios logísticos, económicos, vehículos, armamentos y mayor dotación de personal para afrontar bien estas situaciones, lo que nos tiene sumidos en una crisis. Hemos sufrido un retroceso, pues estamos volviendo a lo que éramos a comienzos del reinicio del período democrático, cuando también estábamos sumidos en una crisis.

Cabe señalar que tuvimos un avance hasta el 2004, pero posteriormente, y debido a estas situaciones, recaímos en el mismo sistema que teníamos antes. Prácticamente, nos estamos limitando al sistema de vigilancia y otras tareas, que no son menos importantes en nuestro servicio, como son la atención de los imputados y la rehabilitación de los reos, las tenemos que dejar de lado, porque no tenemos los medios para hacerlas. De hecho, en la mayoría de las unidades penales tenemos una sobrepoblación que alcanza al ciento por ciento y dotaciones incompletas, lo que nos lleva a tener que paliar esta falta de recursos con sistemas de turnos que no son acordes con un país moderno como Chile.

Nuestros colegas para sustentar los sistemas de vigilancia y evitar que la población penal se fugue, o por lo menos no lo haga en grandes proporciones, se ven obligados a

cumplir turnos sobre las 72 horas en el mejor de los casos. Es decir, el gendarme que cubre guardia perimetral en cualquier unidad de Gendarmería está 72 horas de servicio, es decir, tres días acuartelado.

El señor CERONI.- ¿En la semana?

El señor MARECHAL.- Nuestros servicios funcionan a través del acuartelamiento. Como tenemos escasez de personal, si nos diéramos el gusto de retornar a nuestros hogares después del trabajo, lamentablemente los penales quedarían sin seguridad perimetral. Entonces, ¿cómo se funciona? Los funcionarios que cumplen estos servicios llegan a trabajar un día determinado, están a lo menos tres días dentro de la unidad penal, cumpliendo servicios de día y de noche, y después, según las pautas del servicio y la disponibilidad de éste, se les proporcionan 24 horas de franquía.

Insisto y recalco en que eso ocurre sólo en la mejor de las situaciones, porque hay funcionarios que han debido permanecer hasta diez o quince días dentro de un penal, luego de lo cual se les han dado las mismas 24 horas de franquía.

Ése es el sistema en el que se sustenta el funcionamiento de Gendarmería de Chile. De ahí que estemos pidiendo que la dotación aumente en alrededor de 5.700 funcionarios, porque si bien eso no es suficiente para trabajar en las condiciones que queremos, al menos proporcionaría seguridad en las unidades penales y permitiría que el personal trabajara en un sistema relativamente normal, aunque trabajar en una cárcel nunca será normal.

Los funcionarios que pertenecemos a Gendarmería tenemos muy claro que siempre que la institución nos requiera deberemos estar ahí, aunque nos corresponda franquía. Es un servicio que uno no puede abandonar. Es precisamente por eso que pedimos que se nos otorguen condiciones normales de trabajo, que se respete nuestra franquía y podamos estar con nuestras familias y criar a nuestros hijos como cualquier ciudadano de este país.

Hasta el momento eso no se ha dado.

En ese sentido, consideramos que estamos con un retraso de cerca de cien años. Creo que Gendarmería de Chile es la única institución en América Latina y en el mundo que trabaja en estas condiciones. Por eso pensamos que hay una deuda histórica con este servicio que jamás se ha querido asumir.

Al principio me referí a la sobrepoblación. En estos momentos la población del sistema cerrado, intramuros, es de aproximadamente 46.000 internos. En el sistema

semicerrado, es decir, con beneficios que les permiten salir y retornar de las unidades penales, hay 32.000 internos más. Y en el sistema abierto, que lo cubren principalmente los profesionales que hacen seguimiento a las personas que están cumpliendo alguna pena, hay 18.000 internos. En total Gendarmería atiende cerca de 96 mil internos en los tres sistemas. Sin embargo, quienes trabajamos cumpliendo este tipo de funciones no somos más de 6.000 funcionarios, porque si bien es cierto en total Gendarmería cuenta con 9.000 funcionarios, no lo es menos que esta institución hace guardia en los tribunales, cuenta con direcciones regionales y centros abiertos en los cuales prestan servicios una cantidad importante de nuestros funcionarios. La promulgación de la ley de responsabilidad juvenil nos ha obligado a asumir también los COD Cereco y muchas otras obligaciones y servicios que Gendarmería cumple en favor de la comunidad y sus autoridades, que también restan personal a las unidades penales.

Entonces, son 96.000 internos atendidos por el servicio con una dotación de 6.000 funcionarios. Ustedes pueden sacar las conclusiones de lo que eso significa y de los esfuerzos que debemos hacer todos los días para poder cumplir nuestra tarea, que es titánica.

Aquí tenemos un resumen del incremento por región, pero lo vamos a obviar para que podamos avanzar en el tema global.

Como les decía, todas las unidades del país, sin excepción, están cumpliendo sus funciones con dotación deficiente. No hay ningún jefe de unidad que pueda decir que tiene los suficientes gendarmes para garantizar la misión que se le encomienda al Servicio, que es cuidar, rehabilitar y atender a las personas. En este momento, como señalaba, nos estamos limitando a la custodia, porque nos es imposible realizar las otras misiones.

Estamos siendo ineficientes e ineficaces en proporcionar a las personas que están a nuestro cuidado la seguridad que el Estado espera, que se hace responsable de la integridad de estas personas.

Todos los días tenemos riñas al interior de los penales, hay muerte de imputados y agresiones al personal de Gendarmería, producto de que no tenemos la capacidad logística ni la dotación adecuada para enfrentar estas delicadas situaciones.

No es lo que nosotros quisiéramos como funcionarios públicos. Entendemos la responsabilidad que tenemos, pero es nuestra realidad.

En el último tiempo, Gendarmería ha tenido que asumir la responsabilidad de los COD Cerecos o guardias perimetrales. Todos los funcionarios que se fueron a los COD Cerecos salieron de las unidades penales. O sea, aquí no hubo una promoción de funcionarios para cubrir esa necesidad a lo largo del país, sino que fueron extraídos de las mismas unidades penales.

Asimismo, dentro de los penales se crearon secciones juveniles que necesitan dotación especial de funcionarios. También fueron extraídos de los funcionarios que cumplíamos custodias normales dentro de los penales.

Además, está el problema de los funcionarios del Equipo de Traslado y Reacción Penitenciaria, ETRP, que es la unidad encargada del traslado de los reos. Son los que realizan la irrigación de reos imputados a los diferentes tribunales de la región. Por ejemplo, el ETRP de Valparaíso es una unidad que tiene 35 funcionarios operativos y cubre las necesidades de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué y todas las unidades del interior, San Felipe, Los Andes. Reitero, todo eso con 35 funcionarios. Además, hay que tener en cuenta que normalmente salen alrededor de 60 ó 70 reos. Eso, a pesar de que todos los días hay riñas al interior de los penales y tenemos que sacar gente a los hospitales exteriores para salvarles la vida, que es la mínima humanidad o profesionalismo que podemos tener dentro de las condiciones que estamos laborando.

Todas las nuevas legislaciones que se han llevado adelante han modernizado el sistema de Justicia, y todos entendemos que es bueno y positivo para el país, lo alabamos, pero se ha postergado el sistema de cumplimiento de penas. Entonces, por un lado tenemos un sistema de aplicación de justicia moderno, que ahora funciona con tribunales de garantía, pero, por otro, un sistema penitenciario colapsado.

A los funcionarios jamás se les entregó capacitación. Hay un cambio de figura importante, de reo procesado a imputado. El Estado garantiza a todas las personas que son inocentes hasta que en un juicio se les pruebe lo contrario, pero en el Servicio ha existido nula capacitación para sus funcionarios. En todos los ámbitos no ha habido capacitación en los últimos años. Por ejemplo, tengo 22 años de carrera en Gendarmería y jamás el Servicio me ha capacitado en nada. O sea, nula capacitación.

De los funcionarios de la Planta II son muy pocos los que tienen la suerte de que el Servicio los haya capacitado en algo. Las funciones dentro de Gendarmería se llevan a cabo gracias a la experiencia que los funcionarios adquieren con el tiempo y a lo que aprenden de la enseñanza

de los gendarmes más antiguos, de modo que en ese aspecto hay una falencia importante.

En cuanto a la implementación con que cuenta Gendarmería, la totalidad de los vehículos institucionales no cumplen con los requerimientos para trasladar tanto al personal como a los imputados. La escuálida dotación de vehículos que tenemos está muy mal acondicionada, lo que nos impide brindar los servicios que los magistrados requieren, quienes probablemente para no dañar la imagen del Servicio no presentan todos los reclamos que deberían hacer en cuanto a lo mal que está funcionando Gendarmería. En todo caso, ha habido algunas presentaciones de parte de la Corte Suprema y de cortes de apelaciones de regiones, organismos que han denunciado que faltan funcionarios dentro de las unidades, razón por la que en muchos casos personal de Carabineros debe asumir las funciones de los gendarmes, debido a la escasez de personal que tenemos. De hecho, hace poco la Corte Suprema emitió un informe en el que denuncia la falta de gendarmes en cincuenta y dos ciudades del país.

Por último, respecto de la carrera funcionaria que tenemos en la actualidad, cabe señalar que en 2003 se hizo un intento por suplir algunas de las falencias históricas de Gendarmería. Sin embargo, tal vez debido a falta de suficiente información o a causa de que no se visualizaron con exactitud los problemas, se aumentó la dotación de manera insuficiente. A lo mejor eso se hizo luego de considerar la deuda histórica, pero sin tener en cuenta los cambios que se producirían, como la reforma procesal penal, la nueva legislación respecto de la materia ni las necesidades que iba a tener Gendarmería. En esa oportunidad se creó dentro del escalafón de suboficiales el grado 26, con el nombramiento de vigilantes.

Al respecto, debo señalar que antes de 2003 se egresaba de la escuela institucional como gendarme, pero en la actualidad se egresa como vigilante, grado que está asimilado al de una persona que trabaja como auxiliar, situación que no se condice con la función que cumplen nuestros funcionarios.

Antes de 2003 los gendarmes egresábamos con el grado 22, pero a contar de ese año empezaron a egresar de la escuela de la Institución con el grado 26, lo que implicó para esos nuevos funcionarios 100 mil pesos de disminución en su sueldo.

Esos funcionarios llegan a cumplir su carrera al servicio público muy ilusionados, pero al poco tiempo se dan cuenta de que no tienen ninguna proyección de aumentar de grado, porque como son ocho grados en la carrera les resultará imposible alcanzar, por ejemplo, el de sargento, el cual detento en la actualidad. Por lo tanto, en sus treinta años de carrera con suerte llegarán a ser cabos de gendarmería, considerando un promedio de permanencia de aproximadamente diez o doce años en cada grado.

Debido a lo anterior, a contar de 2003 muchos funcionarios de la Institución están cumpliendo funciones en la guardia interna, en contacto directo con la población penal. Es decir, funcionarios mal pagados, desmotivados, sin los requerimientos mínimos para llevar adelante su trabajo y que trabajan en contacto con población penal altamente peligrosa y conflictiva, con capacidad de corromper al funcionario público por un narcotraficante, por un terrorista o por un delincuente de otra índole. Con ese tipo de gente trabajamos habitualmente.

Entonces, tenemos a vigilantes con grado 26, trabajando con ese tipo de población. Esto nos duele y molesta, porque somos un servicio de los más reconocidos de América Latina.

La gran mayoría de nuestra gente es honesta y honrada. Además, nos gusta nuestro trabajo. Lo llevamos a cabo con la camiseta bien puesta. No queremos que, a raíz de esta situación, en tres o cuatro años más tengamos un Servicio de Gendarmería corrupto, es decir, con funcionarios sumariados, fugados o coludidos con el narcotráfico al interior de las unidades penales. Para evitar esa situación, hacemos presente con tanta fuerza esta realidad.

Por último, y para no alargar la presentación, quisiera referirme a la ampliación de la planta.

Gendarmería evalúa a 5.700 funcionarios. Consideramos justo y digno otorgar una asignación de riesgo al personal, lo que en ninguna instancia se ha considerado. Somos el único servicio uniformado que no tiene asignación de riesgo. Por lo tanto, es lógico que se otorgue, dado lo meritorio de nuestra labor.

Por otra parte, necesitamos efectuar una reestructuración del escalafón y proceder a la eliminación del grado 26.

Además, apelamos a que se nos capacite, a fin de enfrentar mejor las delicadas tareas que se nos encomiendan.

Queremos hacer presente también la carencia de uniformes, de vehículos, de elementos de seguridad y de dependencias para el personal. Muchas veces nuestro personal ha tenido que dormir en verdaderas "ratoneras", porque no tenemos dependencias dignas. Tal es así que, cuando llegan egresados de la Escuela de Gendarmería, debemos cobijarlos en habitaciones que no superan los 3 metros cuadrados. Duermen en esas condiciones 15 ó 20 funcionarios. Algunas literas las ocupan hasta cinco funcionarios. Por lo tanto, pasan a vivir en las peores condiciones que se pueden imaginar. En tal sentido, carecemos de infraestructura para el personal.

Como digo, tenemos infraestructura penitenciaria. Asimismo, somos los últimos en acogernos a los beneficios que se otorgan a las instituciones.

Finalmente, ésta ha sido nuestra presentación, si quieren formularnos algunas consultas estamos dispuestos a resolverlas.

Muchas gracias.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Arturo Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, quisiera ratificar que nuestra institución ha vivido una postergación histórica permanente, en particular, en el aspecto presupuestario.

De hecho, ha carecido de los recursos más básicos de orden material y también de personal a fin de cumplir con los objetivos que nos encomienda la ley.

Nuestra asociación representa a 1.839 trabajadores, profesionales, administrativos, técnicos y auxiliares, los que constituyen el 25 por ciento de la dotación institucional. Esta dotación, al 30 de junio, era de 12.439 funcionarios, de los cuales 1.648 están a contrata y 191 en situación de honorarios cumpliendo funciones permanentes.

Ratificamos la inorganicidad que ha manifestado nuestra institución, el crecimiento absolutamente inorgánico. Encontramos algunos conceptos que no se corresponden con las formalidades legales de la institución.

Nuestra institución se sustenta en dos formalidades legales obsoletas y disfuncionales: el estatuto del personal y la ley orgánica dictada en 1979.

Nuestra visión se tradujo en la consolidación de la deformación cultural que perdió Gendarmería de Chile a partir de 1973 y que se formalizó con esos dos instrumentos que acentuaron en nuestra institución el carácter de pseudo militar. Estudiamos la génesis de esos instrumentos legales y la asimilan a un cuerpo castrense.

En la concepción de los profesionales técnicos de la institución, sin duda es un concepto totalmente antinómico a la misión penitenciaria ya que el fin último de la pena es restituir el contrato social de la persona que trasgredió las normas sociales.

Esa misma ley orgánica mandata a la institución, como última finalidad, a rehabilitar y colaborar en la reinserción de las personas que han sufrido privación de libertad.

Lamentablemente, lo que mandata la ley a nuestra institución no se está cumpliendo por muy diversas razones. Hay un descuido absoluto de las tareas de reinserción social vía presupuestaria. Estudios académicos señalan que sólo el 1 por ciento del presupuesto se destina a tareas de reinserción social. Respuestas institucionales dicen que el 2,5 por ciento se destina a esas tareas.

Por lo tanto, es absolutamente insuficiente y, sin duda, está afectando la eficacia y la eficiencia de la institución. Vemos como los sistemas, particularmente el de intramuros, sistema de cárceles tradicionales, se constituye en una verdadera fuente de autoregeneración y autopotencialización de la delincuencia, con una alta tasa de reincidencia.

Es tal el punto de deformación cultural que ha sufrido nuestra institución que existe discriminación entre sus trabajadores. El personal no adscrito a la planta I y II, el personal no uniformado, vive en una situación de precariedad e inestabilidad laboral como la que les describí.

Todos los trabajadores de la institución están de planta y en nuestro estamento casi el 70 por ciento se encuentra a contrata o a honorarios. Eso ya es un descuido en las tareas de reinserción social con que la ley mandata a la institución y una abierta discriminación entre los trabajadores que cumplen tareas muy importantes.

Todo lo anterior está avalado, por ejemplo, con la modernización del Estado y la definición de metas institucionales. El 90 por ciento de esas metas institucionales tiene en su responsabilidad operativa a los profesionales y técnicos que están absolutamente discriminados en términos estatutarios.

El estatuto del personal, que surge en 1979 y que seudo militariza a la institución, discrimina al personal no uniformado, a todos los profesionales y los excluye del estatuto en diversos aspectos. Por ejemplo, la carrera funcionaria, en la que no se establece una fijación de dotaciones.

Asimismo, se les excluye del estatuto en su carrera funcionaria trasladándolos al estatuto administrativo y teniéndolos en situaciones de gran precariedad, inestabilidad y daño remuneracional, a partir de la ley del nuevo trato laboral, N°19.882, en que se nos adscribe, al igual que a todo el personal de la administración pública, a un nuevo sistema de concurso.

Desde 2003 mantenemos un promedio de 50 cargos vacantes que no se han podido llenar. Se acaba de realizar un concurso para 80 profesionales y técnicos, que ha significado una pérdida remuneracional de más de 100 millones de pesos para los profesionales y técnicos de la institución.

Estamos demandando, desde la Presidenta de la República hasta el Ministerio de Justicia y a la Dirección Nacional, que hasta el minuto ha sido desoída, una reformulación de la ley orgánica que sostiene a la institución y del estatuto del personal. Estamos demandando cosas muy simples, una ley orgánica que dé cuenta de lo que es Gendarmería de Chile hoy.

En la sociedad existe un gran desconocimiento de nuestra institución, la opinión pública se queda con la imagen física de Gendarmería, la cárcel y las rejas. En lo humano, sólo los gendarmes.

Hoy Gendarmería es mucho más, hay 43 mil personas que han cometido diversos delitos y que se encuentran cumpliendo penas alternativas conforme a la Ley N° 18.216, de 1983. Ellos están bajo la tuición de Gendarmería de Chile en centros de reinserción social, donde las responsabilidades operacionales corresponden a profesionales, técnicos y administrativos de la institución. Eso es Gendarmería hoy. Podríamos incluso decir, en términos vulgares, que hay 44 mil delincuentes cumpliendo penas alternativas en la calle, sin ninguna intervención técnica sólida que les permita reformular sus proyectos de vida. Tenemos 38 mil en las cárceles.

Gendarmería no es sólo la muralla, la reja, la torre, sino que una institución social extremadamente compleja. Por eso demandamos, como profesionales y técnicos, que nuestra institución debe insertarse en una política pública que tenga como norte, no sólo la seguridad ciudadana, sino también el desarrollo humano.

El funcionamiento del sistema de cumplimiento de penas, lo único que hace es auto regenerar y potenciar la delincuencia.

Respecto de la ley orgánica dictada en forma espuria en 1979, pedimos que se dé cuenta de lo que es Gendarmería. Hoy todo el sistema del medio libre que señalaba, en el que Gendarmería tiene la principal responsabilidad numérica, no tiene ningún sustento en su ley orgánica, no existen las funciones, los cargos ni las unidades penales. Hay una serie de departamentos que en la institución están operando de hecho; departamentos sensibles

como salud del personal, auditorías, informática, etcétera, que son herramientas importantes para nuestra gestión.

Por lo tanto, nuestra demanda es una reformulación urgente de la ley orgánica y del estatuto del personal. Del mismo modo, en las plantas I y II, tenemos una bajísima dotación.

Ahora bien, se estableció el sistema de cárceles concesionadas, frente al cual tenemos una severa crítica, no sólo por el impacto que está teniendo en el erario nacional.

Hace algunos meses hicimos una denuncia a un parlamentario y le enviamos a través del correo electrónico la forma de cómo se está administrando este sistema. Se están haciendo concesiones casi gratuitas a empresarios. Es el caso de la indemnización que se otorgó por hacer modificaciones en la primera etapa de las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua.

En aquella oportunidad se pagó al empresariado 112,6 millones de dólares por modificaciones hechas en las cárceles. Una cifra equivalente a construir cuatro cárceles más, conforme al diseño original. Nos preocupa, como ciudadanos, el que decisiones de tal magnitud se entreguen a una comisión arbitral de personas designadas, y no a los tribunales de justicia.

Digo lo anterior, a propósito de este nuevo sistema de concesiones que ha aparecido como exitoso en la prensa. Anteayer estuve en El Manzano y vi los armatostes que quedaron abandonados en Concepción y cómo el Estado tendrá que reconstruir todo nuevamente.

El empresario, al no haber dado cumplimiento integral, fue indemnizado por el Estado con 600.000 UF. Como ciudadanos, nos preocupa ese impacto remuneracional porque impacta directamente al erario nacional.

Nos preocupan los contenidos del sistema de cárceles concesionadas, porque no nos explicamos cómo el Estado ha delegado tareas que la ley mandata al personal de Gendarmería. Tareas como la reinserción social han sido entregadas al empresariado privado que hoy está contratando profesionales y técnicos para que asuman esas labores que antes correspondían a Gendarmería.

El sistema de concesión de cárceles no está en la ley orgánica de Gendarmería, por lo tanto, nuestra demanda es que quienes cumplan funciones penitenciarias estén adscritos al estatuto del personal de Gendarmería y que sean reconocidos como trabajadores penitenciarios. Demandamos una

ley orgánica que dé cuenta de lo que es Gendarmería para que no se siga operando de hecho.

Hace algunos días, por arbitrio y resolución del Director Nacional, se creó un nuevo departamento llamado Subdirección Operativa. Si bien compartimos su estructura y funciones a desempeñar, esto queda subordinado a la decisión del Director Nacional de Gendarmería, quien, el día de mañana, puede tener otro concepto sobre esta área de trabajo y eliminarla.

El personal que nosotros representamos ha instalado diversas propuestas en forma responsable ante la Presidenta de la República, el Ministro de Justicia y el Director Nacional de Gendarmería. Lamentablemente denunciamos que hasta este minuto no hemos tenido respuesta, a pesar de que hay compromisos y protocolos suscritos. Nuestra preocupación es extrema, por lo tanto, hemos definido estrategias para el logro de estos objetivos. Nuestra demanda es estamentaria y, a su vez, busca velar por la condición de los trabajadores de Gendarmería, por lo tanto, reiteramos que queremos que el sistema penitenciario sea asumido como una política pública coherente con la enorme responsabilidad que hoy tiene en el país.

Hoy, bajo la tuición de Gendarmería, hay más de cien mil chilenos. 44 mil son diversos tipos de delincuentes que, en el medio libre, están cumpliendo penas alternativas. 38 mil están en las cárceles y 16 mil en el sistema penitenciario, adjuntado al decreto ley N° 409, que al permitir eliminar sus antecedentes, facilita su reinserción social.

Esto es, en términos generales, la situación del estamento que representamos.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Alvear.

El señor ALVEAR.- Señor Presidente, como oficial de esta institución, quiero tener cierta libertad de decir lo que pienso respecto de los motivos de esta invitación.

Creo que la discusión pasa necesariamente porque se entiende que el valor que tiene la institución para la sociedad es muy bajo, por decir lo menos, y se debe específicamente por una distorsión de lo que es y lo que debe ser Gendarmería. Hoy existen distintas perspectivas, incluso del personal que la compone.

En primer lugar, hago entrega de un set de fotografías en donde aparecen funcionarios de la promoción de 1960 y anteriores, en donde ustedes pueden ver que no sólo

visten uniformes sino que juraron ante el Pabellón Nacional rendir la vida si fuese necesario. Esto no es consecuencia de los procesos de 1973 o de 1980; esto es parte de nuestra tradición y de cómo nacimos como institución.

Tenemos principios y valores, y si bien es cierto somos empleados públicos como cualquier otro, nos sentimos muy orgullosos de serlo, pero consideramos que no todos juran rendir la vida si fuese necesario, como sí lo hacemos nosotros en el transcurso de la historia penitenciaria que, obviamente, marcan la diferencia y un sello distinto y propio del cual -repito- nos sentimos muy orgullosos como funcionarios de la institución y uniformados.

En 1980 -como decía el señor Arturo Sandoval- se pseudo militarizó la institución. Quiero recordar que en 1980 se le quitó a Gendarmería su uniforme, su denominación castrense, la asignación de riesgo, los quinquenios penitenciarios, la asignación de mayor sueldo y Dipreca habiendo sido cofundadores con Carabineros de la Caja de Previsión, pasando a formar parte de las AFPs e Isapres. Los funcionarios que perdieron la vida en ese tiempo de transición, 1980-1990, se fueron en condiciones muy paupérrimas, y lo mismo les ocurrió a los funcionarios que se acogieron a retiro.

¿Cuándo regresamos a Dipreca? Después de la muerte de cuatro gendarmes y un carabinero en el Hospital Sótero del Río, en donde un periodista, dos días después de la muerte de estos funcionarios, hace la relación entre la pensión que tenía el carabinero y la que tenía el capitán de Gendarmería. Obviamente, había una disparidad atroz, lo que motivó que rápidamente se legislara y volviésemos a ser parte de Dipreca. Ésa es la historia.

Así fuimos tratados cuando se nos quitó nuestro uniforme; no era el verde que hoy ustedes conocen, sino un plomo con ribetes de color azul. Se nos trató como si fuéramos un antro de comunistas y hay que recordar lo que dijo en su minuto un integrante de las Fuerzas Armadas. En cambio hoy se nos trata como militares porque vestimos un uniforme. Me pregunto si Bomberos, porque también usa uniforme, desfila, tiene ritos propios, los querrán pasar también al Ministerio de Defensa. Me parece que no es el uniforme el que hace una institución militar, sino que los principios y valores que caracterizan a la organización en relación a otra. Eso lo veo con preocupación, porque, en el fondo, refleja que a la institución se le ve como cualquier otro servicio, lo que explica un sinnúmero de situaciones que hoy es parte de esta invitación, como el tema relacionado con los sobresueldos. A lo mejor, eso no pasaría en una

institución con una valoración distinta por parte de las autoridades.

Por otra parte, quiero abordar sucintamente y recalcar el tema de la cultura organizacional, la cual no se cambia por decreto. En 1980, cuando se nos suprimió la denominación castrense y después de once documentos -1980 a 1990- que la suprimían, hasta el día de hoy, como funcionarios de Gendarmería, nuestro trato es con denominación castrense, lo que no nos hace militares porque no nos rige el Código Justicia Militar, sino al Estatuto Administrativo como cualquier otro empleado público. Sin embargo, consideramos que en el ejercicio de la función penitenciaria hemos sido formados en una escuela institucional como gendarmes y es muy distinto ver a Gendarmería desde lejos que verla desde adentro.

Creemos y estimamos loable la intención de rehabilitar a los internos que tenemos a nuestro cargo, es sumamente necesario, pero también es muy difícil, conociendo la evolución de la delincuencia en términos cualitativos. Hoy, tenemos una delincuencia muy distinta a la de hace diez años, con características de bandas organizadas al interior de las cárceles que opera hacia el exterior; incluso, relación de delincuencia con bandas organizadas transnacionales. Ésa es la delincuencia que enfrentamos. Tenemos dos tipos de delincuencia, una que está en el sistema libre, cumpliendo penas alternativas, cuyo requisito primario es a través de un informe presencial determinar si su permanencia en el medio libre es o no constitutiva de riesgo, y eso puede determinar si el sujeto cumple condena en el sistema abierto -no de riesgo social- o en el sistema cerrado, que sí constituye riesgo para la comunidad. Por eso, debe permanecer en una cárcel cerrada.

Estimamos que Gendarmería no puede hacerse cargo de la reinserción, puede contribuir como muchas otras organizaciones, pero recibimos al sujeto a los 18 años de edad, cuando ha transcurrido una vida delictual, por lo tanto, es muy difícil que en tres o cinco años podamos cambiar una vida si las otras condiciones sociales, cuando él egrese, no han cambiado.

Lo que podemos garantizar es el cumplimiento del trabajo y tratar de, efectivamente, propender a una reinserción social. Eso sí lo podemos hacer.

Estimamos que podemos mejorar, pero sólo a través de la valoración de la institución. Que se reconozca técnicamente la institución.

No sé y no entiendo, señores diputados, cómo cuando se habla del delito o del delincuente a enfrentar muchos relacionan este fenómeno

como un tema policial, donde la solución pareciera ser que se incrementara la dotación de Carabineros en las calles o la de funcionarios de Investigaciones.

La delincuencia es un problema social. Esto lo vivimos diariamente, sabemos cómo piensan los internos. Los gendarmes somos los que menos opinamos acerca de los delincuentes y otros sí tienen más tribuna que nosotros frente al tema. Podemos hacer cumplir las penas, podemos tratar de reinsertar a esos sujetos, pero entendiendo que la reinserción es una tarea de todos y obliga a toda la sociedad a entender que éste es un problema social.

Las distorsiones o visiones distintas nos complican, ya que no es el sueldo del gendarme el que permite que hoy los funcionarios soporten las condiciones en las cuales trabajan.

Por 300 ó 400 mil pesos que recibimos, no vamos a entrar a una unidad penal a sofocar un motín, donde siempre somos minoría y donde, obviamente, el nivel de riesgo es mucho mayor. No entramos por eso. Entramos porque somos empleados públicos que juramos rendir la vida si fuese necesario. Ese compromiso con la Patria es el que diferencia la función del gendarme con el de cualquier otro empleado público. Lo digo con el respeto que me merecen las otras funciones públicas. Pero eso es lo que marca la diferencia.

Hoy podemos afirmar con firmeza que la institución no se valora respecto de otras que tienen directa relación con el delito y el delincuente. No tiene la valoración. Ni siquiera en la inyección de recursos adicionales, cuando se quieren tomar medidas extraordinarias para reducir la percepción de inseguridad en la comunidad. No existe esa relación.

El hecho de que existan más Carabineros, más funcionarios de Investigaciones, no significa que se reducirá la delincuencia, sino que se logrará tener más presos en las cárceles, lo que tiene relación directa con la inversión en más colchones, más frazadas, más alimentación, más espacio y esto no siempre o casi nunca es proporcional.

Demandamos más respeto hacia la institución. Somos parte importante en la seguridad ciudadana; podemos contribuir efectivamente - es lo que decía Arturo Sandoval- a la reinserción, pero como un estamento más de otras organizaciones. Lo único que podemos garantizar, lamentablemente, es el cumplimiento de la pena, pero las condiciones en que lo estamos haciendo son prácticamente inviables.

Hoy, hace pocos días, fuimos testigos de que dos funcionarios de Gendarmería de Concepción anunciaron una huelga de hambre para presionar por demandas, que nosotros podemos compartir o no, inclusive hasta cuestionar a lo mejor esa forma de presionar, pero nos parece grave que la institución esté hoy viviendo con esos niveles de desesperación, porque no olviden que lo que tenemos son justamente personas privadas de libertad, en que la variable determinante para mantener el orden es la disciplina.

Si como funcionarios hacemos esto, mañana estamos invitando a 40 mil internos del sistema cerrado a buscar medidas de presión distintas. Todos vamos a saber a lo mejor dónde empieza el problema, pero no dónde termina.

Quiero terminar mi intervención señalando que con relación a los sobresueldos de Gendarmería no tenemos los elementos probatorios para decir si estas asesorías se realizaron o no. Lo que podemos decir categóricamente -y esto porque es un contrato directamente del director

con las personas que hacen estas asesorías- es que este manto de dudas que se socializa afecta nuevamente al personal de la institución y, obviamente, también implica una falta de respeto. Hay comentarios de los cuales no nos podemos hacer cargo, pero quiero que ustedes también lo sepan, que el personal en general y es transversal a las tres plantas - las uniformadas, no uniformadas, profesionales, técnicos, oficiales o suboficiales- nuevamente se ve mancillado, perjudicado por acciones distintas a las que pretende el funcionario, día a día: trabajar de mejor manera y posicionar a la institución en el escenario que le corresponde. Este tipo de hechos, que nosotros no conocíamos, obviamente afectan la moral del personal, en circunstancias de que hoy debiéramos tratar de hacer todo lo contrario: potenciar a su personal que trabaja en condiciones infrahumanas.

En 1994, don Ricardo Montaner era alcaide del CDP Santiago Sur, la actual penitenciaria. De allí, se fugaron 32 internos: cuatro de ellos murieron, ocho lograron su objetivo y los demás fueron recapturados. Cuando la fiscalía le formuló cargos, el señor Montaner señaló que había déficit de guardianes y que, pese a haberlos pedido en forma reiterada, nunca se los habían otorgado. Estamos en 2007 planteando lo mismo: déficit de personal y eso es lo que nos preocupa.

Gendarmería ha estado siempre administrando pocos o escasos recursos. Sin embargo, hoy en día es el mejor sistema penitenciario evaluado en la región -no lo digo yo, sino de acuerdo con la opinión técnica que existe de nuestra institución-, lo que no es fruto de improvisación, sino del esfuerzo que hemos hecho.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Ward.

El señor WARD.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de los representantes de las tres organizaciones que, a su vez, representan a funcionarios de Gendarmería.

No tengo por qué ocultar el hecho de que me he juntado con algunos de ellos en otras ocasiones, a raíz de las denuncias que han aparecido en los medios de comunicación y que dan cuenta ya sea de eventuales irregularidades o sobresueldos.

Quiero agradecerles su presencia en esta Comisión, pues es muy oportuno el haber comenzado el trabajo de ésta con su testimonio acerca de la deuda histórica y de las carencias actuales que tienen para desempeñar diariamente su labor. Todo esto nos ilustra, de manera muy gráfica, para el trabajo que desempeñaremos de aquí en adelante, ya que vamos a poder comparar los montos que se han asignado para algunas asesorías con relación a las carencias que actualmente tiene Gendarmería.

Quiero hacerles cuatro consultas específicas. En primer lugar, de acuerdo con la información oficial que entregó la subsecretaría de Justicia, hay cerca de 140 millones pesos entregados por concepto de asesorías y contratos a honorarios durante los últimos cuatro años destinados a procesos de modernización. Esa es la carátula general que abarca gran parte de los contratos a honorarios en los que, además, aparecen vinculados personeros de la Concertación y en casi todos los casos aparece este concepto: "procesos de modernización". Por lo tanto, ¿qué nos pueden informar al respecto? ¿Qué impacto positivo han tenido estas asesorías en general? Escuchábamos recién de parte del presidente de la ANOP que no se encuentran en condiciones de aclarar, desmentir ni confirmar, ya que no están los medios de prueba, lo que considero muy responsable de su parte. Sin embargo, uno tiene la posibilidad de recibir el impacto positivo de una asesoría o de un grupo de asesorías en materias de modernización, sobre todo, cuando se han desarrollado durante los últimos cuatro años.

En segundo lugar, es muy importante no apuntar con el dedo ni responsabilizar a nadie por sus actuaciones, pues, sin duda, los nombres ya están a la luz pública. ¿Han visto a estas personas prestando algún tipo de asesorías? ¿Conocen el trabajo que realizan? ¿Han tenido acceso a los informes trimestrales que en virtud de los contratos tienen que entregar? ¿Han tenido algún beneficio concreto para la labor que desarrollan ustedes y el resto de los funcionarios de Gendarmería?

En tercer lugar, a través del testimonio de diferentes personas y también de testimonios de carácter periodístico - que no he tenido la posibilidad de comprobar-, aparentemente, existe un grado muy preocupante de politización dentro de Gendarmería. Incluso, se ha hablado de verdaderas brigadas políticas. Tengo entendido que el actual director fue el presidente de una de las brigadas de uno de los partidos. Entiendo que la labor que se desarrolla al interior de la institución en materia partidaria es realmente preocupante. Por lo tanto, ¿están en condiciones de entregar algún tipo de información sobre ello?

En cuarto lugar, quiero contarles a nuestros invitados que hace un par de semanas solicitamos, a través de un oficio enviado por la Oficina de Informaciones, las auditorías internas de los últimos años, pues hemos tenido acceso a información que, obviamente, hasta la fecha no hemos podido comprobar acerca de que habría algún tipo de autocrítica interna con relación a que en Gendarmería, en realidad, se estaban despilfarrando recursos y no utilizándolos de la

mejora manera, dada las carencias de de las que ustedes nos han hablado. Esa información aún no llega a la Cámara, está pendiente, pero quiero saber si hay información anexa, relacionada con el trabajo que nos ha encomendado la Sala.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Germán Aguirre.

El señor AGUIRRE.- Señor Presidente, en primer lugar, quiero agradecer su invitación.

En segundo lugar, quiero decir que soy el comandante Germán Aguirre y que llevo veinticinco años en la institución. He vivido diferentes procesos en la penitenciaria, desde el año 1982, cuando ingresé al servicio.

Mi ansiedad por exponer los problemas que tiene Gendarmería obedece a la deuda histórica que se tiene con ella. He conocido la situación precaria en que ha vivido el personal y, en general, la población penal. Por eso, me parece muy responsable que ustedes hayan decidido investigar estos hechos, tan lamentables en una institución carente de recursos y que cumple una función de seguridad social importante.

Producto del proceso de modernización de Gendarmería, desde 1990 en adelante, han mejorado muchas cosas, pues antes había unidades miserables, que eran una falta de respeto a la dignidad humana, tanto para los gendarmes como para la población penal. En fin, se han mejorado muchas cosas, pero Gendarmería se ha transformado en una fuente de ingresos extras. Eso está claro, por cuanto he estado en más de catorce unidades penales y en la escuela institucional, a la cual llegaba gente a asumir cargos inventados. En este momento me acuerdo del caso del señor Carlos Latapiat Charlín, que en paz descansa -incluso, ha aparecido en el diario Las Últimas Noticias-, a quien se le pagaba sueldo a pesar de estar fallecido. Es más, el mismo creó y asumió el cargo, si mal no recuerdo, de secretario general académico. Incluso, en una oportunidad, se jactó ante nosotros de que le llegara un sueldo extra, cuestión que nos dejó indignados.

Como dije, por la institución ha desfilado un sinnúmero de personas que ocupan cargos, subdirectores y jefes de departamento, que en nada han contribuido. Incluso, sus profesiones no tienen vínculo alguno con la función penitenciaria. Todos los problemas que tenemos y que, de alguna manera, restan eficacia y eficiencia a la institución, no se van a solucionar si Gendarmería continúa como fuente de ingresos extras y para devolver diversos favores políticos, o de distinta índole, en desmedro de la gente que trabaja en la

institución y que conoce el sistema desde hace veinticinco o setenta años y puede ser un aporte.

En consecuencia, esto reviste gravedad, por cuanto si no se toma conciencia de que es la gente que trabaja en Gendarmería aquella que tiene que asumir la administración institucional, van a continuar los problemas administrativos.

En este sentido, efectivamente hay un problema político, por cuanto las autoridades del servicio son designadas. Al director nacional le han puesto asesores en todas las unidades del país, en la escuela institucional y en las direcciones regionales. Son asesores cuyos cargos responden a la devolución de favores políticos. Eso no puede ser, por cuanto los recursos económicos que debieran llegar a la institución son entregados a esas personas, que luego se retiran de ella, después regresan o se van a otros lugares. Es más, hace poco tiempo atrás quería incorporarse a la escuela institucional una persona que venía designada políticamente. En consecuencia, nosotros, como asociación, planteamos que es importante que la gente que es de la institución ocupe esos cargos. Es claro que se crean puestos para devolver favores y que no contribuyen a la institución.

Por otra parte, dadas las dificultades que tenemos tanto en la rehabilitación como en la falta de profesionales y de recursos, no he visto que esas asesorías se hayan plasmado realmente en nuestra función. Como jefe de unidad y presidente del consejo técnico, donde trabajamos por la rehabilitación de los internos y por el otorgamiento de beneficios intrapenitenciarios, no he visto plasmado en las asesorías que se vaya a mejorar el sistema de rehabilitación ni los beneficios para la población penal. Tampoco puedo decir que eso no se ha hecho. Pero, ¿han sido eficaces? ¿Han contribuido realmente al sistema penitenciario? Con una importante cantidad de millones de pesos se podría aumentar el número de profesionales y los recursos para el personal, mejorar la infraestructura de las dependencias de los funcionarios y de la población penal, comprar chalecos antibalas, etcétera.

Insisto, esas asesorías no se han visto plasmadas en la institución. Lo señalo porque he trabajado en catorce unidades penales y, además, quiero mucho a la institución. Nosotros, los gendarmes, nos forjamos en la adversidad. Incluso, la sociedad nos discrimina por pertenecer a Gendarmería y por trabajar en unidades penales. Entonces, causa mucha impotencia y una pena que desmotiva ver que los recursos destinados a la institución son despilfarrados o entregados por favores no institucionales.

En este momento estamos preocupados de contribuir a la seguridad ciudadana. No obstante, trabajamos con personal desmotivado, pues no tiene recursos, ni uniformes ni dependencias adecuadas y, además, está sobrecargado y estresado. A pesar de ello, debemos administrar al personal y controlar a una población penal que está muy hacinada. Como señaló el presidente de nuestra asociación, hay una gran desmotivación.

Asimismo, me preocupa el futuro de la institución, porque la población penal es cada vez más complicada y va aumentando. Nosotros sabemos que la delincuencia no va a terminar de un día para otro. Insisto, los dineros que fueron invertidos en asesorías no han sido plasmados en las diversas unidades. Lo digo con mucha responsabilidad y con la seriedad que el caso requiere.

Respecto de las brigadas políticas a que ha hecho mención el diputado Ward, aparecen asesores provenientes de diversas corrientes políticas. De acuerdo con el director nacional que esté de turno, a él obviamente le van a imponer personas en determinados puestos. Incluso, al director nacional le manifestamos que algunos asesores llegaban a las unidades a imponer cosas que desconocían y que el alcaide -un comandante o un coronel- debía escucharlos aun cuando impusieran cosas inadecuadas para el proceso penitenciario. Como ciertas personas eran impuestas políticamente, obviamente había que escucharlas. Desde luego, se cometen errores en ese sentido, pues había que decirles que era un error lo que planteaban. De modo que hay que recibir a distintos asesores cuando un nuevo director nacional asume el mando de la institución. Ellos, que supuestamente van a mejorar la institución, no tienen un conocimiento cabal de la función penitenciaria.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Señor Aguirre, ¿puede precisar más sobre el punto?

El señor AGUIRRE.- Señor Presidente, ésa es la respuesta al tema de las asesorías y a los favores políticos que se dan en la institución, lo que nos afecta directamente en nuestra función.

El señor ALARCÓN.- La modernización va aparejada a la administración. En estos momentos, la administración penitenciaria no está funcionando, pues los procesos son entrabados por el cuoteo político. Se requiere profesionalizar nuestra institución a nivel técnico. No somos una institución política. Nuestra función es para el bien de toda la sociedad y no para determinadas personas o grupos.

Nos preocupa bastante la politización, porque una institución como la nuestra no debe ser usada con esos fines. Estamos para cumplir un servicio a la sociedad, a todo el país. Para eso fuimos formados como funcionarios y por eso arriesgamos nuestra vida, aunque muchas veces por 240 mil pesos no valga la pena arriesgarla.

Agradecemos la oportunidad de asistir a esta Comisión, porque es importante que sepan las irregularidades que están sucediendo en nuestra institución.

El señor MARECHAL.- Señor Presidente, si bien es cierto no tenemos antecedentes punitivos con respecto a las situaciones que se denuncian, no es menos cierto que es fácil apreciar algunas situaciones. Por ejemplo, voy a nombrar una persona al azar: Zoran Sfeir, que trabaja actualmente en la Dirección Nacional de Gendarmería, y que es egresado de derecho.

Mi intención no es atacar a esa persona, sino que denunciar un hecho. Zoran Sfeir es un egresado de la carrera de derecho que está a cargo de un staff de abogados. En esa repartición la mayoría de los profesionales son abogados por la misión que cumplimos. Él recibe honorarios a contrata, a los que se renuncia un mes antes del término del contrato.

Junto con Juan Rivas, tesorero de la Asociación, revisamos toda la documentación y nos percatamos de que en varias situaciones en que hay contrato a honorarios, un mes antes de terminar su contrato las personas presentan su renuncia voluntaria. Nos llama la atención que sean egresados de derecho y no abogados los que presten asesoría jurídica al servicio. Hay tres casos de egresados de derecho que no son todavía profesionales propiamente tales.

También quiero señalar el caso de las declaraciones juradas simples cuya documentación está incompleta, y no sé cómo la Contraloría no lo detectó en su momento. Por ejemplo, hay una persona que hace una declaración jurada y no señala su profesión u oficio. Es decir, no sabemos cuál es el alcance de las prestaciones que hará a Gendarmería. Otras personas se presentan como consultores. También se puede apreciar una declaración jurada vacía que se adjunta a los contratos. Eso referente a las asesorías que se prestan.

El señor RIVAS.- Mi nombre es Juan Rivas, soy cabo primero de Gendarmería y llevo quince años en la institución.

Si me permiten, quiero hacer un comentario acerca del proceso de modernización.

Cuando retornó la democracia, Gendarmería estaba en mal pie. Se produjeron ciertos hechos que provocaron la

muerte de algunos colegas, lo cual sensibilizó a la sociedad e indujo los primeros cambios.

El proceso de modernización básicamente se basó en el sistema de concesiones. Se suponía que este sistema, que se basa en un sistema norteamericano y europeo que, lamentablemente, no se preocupa del recurso humano, mejoraría las condiciones dentro de la institución, pero ello hoy está en entredicho, a la luz de los que han informado algunos programas de televisión.

En Gendarmería no hay una preocupación institucional, por ejemplo, por la capacitación de los gendarmes, por la salud mental o física de los funcionarios, ni por las condiciones profesionales en que nos desempeñamos quienes trabajamos para la institución. Simplemente se viste de uniforme a un joven de 18 años y se le envía a una cárcel a trabajar con delincuentes muy complejos. Y más encima lo revientan trabajando con métodos que son arcaicos, ya que, como sabrán, no hay ninguna otra institución de la administración pública de nuestro país que trabaje con acuartelamiento de tres o más días. Porque no son sólo tres días, como se piensa; tenemos antecedentes de que ha habido acuartelamientos de más de diez días.

Con esas condiciones de trabajo el funcionario debe dejar de lado a su familia. Y no sólo por un año, sino por varios.

Si se quieren implementar procesos de modernización, necesariamente hay que pensar en el recurso humano, que es el verdadero capital que tiene esta institución. Hay funcionarios que después de treinta años de servicios se acogen ha retiro, habiendo dado buena parte de su vida a Gendarmería, con mucho sacrificio, y habiendo perdido a sus familias, porque el desarraigo familiar es muy grande.

Muchas gracias.

El señor SANDOVAL.- Respecto de las cuatro preguntas del diputado señor Ward, puedo decir lo siguiente:

No tengo muy claro a quiénes está referida la denuncia de los 140 millones de pesos en los últimos cuatro años. Cuando apareció la información en la prensa, que es el medio a través del cual nos enteramos, estudiamos la nómina que publicó www.emol.com y nos encontramos con que en ella había 146 funcionarios de Gendarmería, profesionales y técnicos, de aquellos a los que recién nos referimos, que han cumplido funciones permanentemente a través de contratos a honorarios, lo cual sin duda vulnera el espíritu del sistema.

Nos preocupó que aparecieran nombrados esos compañeros, quienes incluso hasta hoy se mantienen prestando sus servicios en las mismas condiciones.

Ahora, respecto de las asesorías que habrían prestado las personalidades políticas que aparecieron nombradas en la publicación, desconocemos en qué consistieron tales asesorías, por cuanto esa modalidad de prestación de servicios no obliga al cumplimiento de horarios ni a permanencia en la institución.

Lo señalo con mucha autoridad, por cuanto desde hace dos años en el Patronato Nacional de Reos contamos con aproximadamente doscientas personas contratadas bajo esa modalidad, la de honorarios. Esos funcionarios cumplen funciones de diversa naturaleza.

Por tanto, no sabemos si esas personalidades prestaron asesorías o si hicieron o no hicieron los estudios para los cuales fueron contratados. Si bien todos conocemos el estado de la institución -de hecho todas las asociaciones lo han señalado acá-, no sabemos qué impacto tuvieron esos estudios.

Particularmente nos preocupa una cuestión de la que también nos hemos enterado por informaciones de prensa. Me refiero a que algunos ex ministros y autoridades políticas aparecieron diciendo que habían sido sobresueldos que provienen de un acuerdo que se materializó durante el gobierno de Ricardo Lagos. Nos preocupa que el actual ministro de Justicia, el señor Carlos Maldonado, haya recibido pagos por ese concepto y no por estudios realizados, porque entonces sería insultante que desempeñe esa función y estuviera a cargo de un área tan importante como Gendarmería.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Puede repetir lo último que dijo?

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, nosotros no tenemos la información oficial de qué estudios o asesorías prestaron. Como el sistema de contratación a honorarios no obliga permanencia ni cumplimiento de horarios rígidos, sino que son prestaciones de servicios, todo el conocimiento inicial que tuvimos fue a través de la prensa, y lo denunciarnos, sacamos nuestro comunicado, y aparecieron voces de algunas autoridades políticas señalando cuál había sido su condición en Gendarmería -estamos hablando de la década del 90- y algunos sostuvieron que habían sido sobresueldos, que sancionó el gobierno de Lagos, después de un acuerdo.

Por lo tanto, queremos saber si el actual ministro de Justicia, que también figura en el listado, estuvo en el

concepto de una asesoría o de un estudio, porque si fue en el concepto de sobresueldos resultaría insultante que hoy estuviera ejerciendo ese cargo y teniendo entre las instituciones responsables a Gendarmería.

El señor DÍAZ (don Eduardo).- ¿Se refiere al acuerdo Lagos-Longueira?

El señor MARECHAL.- Sí.

El señor SANDOVAL.- Respecto de la politización en Gendarmería, la verdad es que conozco la institución desde hace muchos años, quizás desde antes de nacer porque soy hijo de gendarme. Supe lo que era esta institución hasta 1973, en que había un director nacional del Partido Comunista y en los departamentos había jefaturas de carrera de todos los sectores políticos, desde la Derecha a la Izquierda. Era una administración absolutamente plural.

Cuando se instala la politización en Gendarmería es a partir de septiembre de 1973, la que concluye en 1990 con la exoneración política de más de un millar de funcionarios, exclusivamente por razones políticas. Es más, sufrimos la desaparición de compañeros y el asesinato del director nacional de Gendarmería.

Esto, sin duda, continúa después. Como ustedes saben, Gendarmería está subordinada a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y los cargos hasta el tercer nivel son de confianza política. Por lo tanto, sin duda que genera automáticamente acciones de tipo político.

Ahora, la opción de un gendarme es opción personal, es el derecho de adscribirse o no a un partido político, y el que sesionen o no brigadas políticas lo desconocemos en términos institucionales, porque ellos tal vez lo ejercen en su vida privada, y tienen derechos.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado señor Guillermo Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, en primer lugar, a todos quienes conocemos Gendarmería nos preocupa lo que se ha mencionado en la Comisión sobre la situación muy inadecuada en que están trabajando. Por supuesto, nuestro compromiso es tratar de hacer lo más que se pueda en esa materia.

En segundo lugar, quisiera preguntar tanto al presidente de la Asociación Nacional de Suboficiales como al presidente de la Asociación Nacional de Directivos Profesionales, Técnicos, Administrativos y Auxiliares, si realmente les consta que fueron irregulares todas las contrataciones, asesorías y algunos contratos a honorarios. Si les consta que

son irregulares, les pido que me expliquen por qué siendo irregulares pasaron por la Contraloría y ésta le dio el visto bueno.

Les solicito que sean precisos en sus respuestas porque ésta es una Comisión Investigadora y no puede basarse en lo que diga la prensa y en sus calificativos, sino en hechos, en pruebas.

En cuanto a los contratos que ha mostrado ante la Comisión el presidente de la Asociación de Suboficiales de Gendarmería, sargento 2º señor Juan Marechal, como abogado debo decir que no los considero irregulares ni ilegales si pasaron la tramitación respectiva de la Contraloría.

Sin embargo, si los representantes de dicha asociación tienen antecedentes de que efectivamente lo son, quiero que me digan sobre la base de qué lo afirman y cómo se justifica que hayan pasado la tramitación que deben efectuar ante el órgano contralor.

En ese sentido, si en definitiva se establece que los contratos no son irregulares, me gustaría que los representantes de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería los denominaran de manera diferente, tal vez como poco eficientes de parte de la Dirección, o sin sentido.

Por otra parte, las asesorías de cualquier naturaleza que se hubieran hecho, sean consideradas por algunos eficientes o no, se supone que se efectuaron con el objeto de modernizar Gendarmería, de manera que quiero que nuestros invitados nos digan si encuentran que se ha avanzado al menos algo en materia de modernización de la Institución.

Hago esa consulta porque como miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recuerdo que hace un tiempo recibimos a los representantes de las asociaciones de funcionarios de Gendarmería para analizar las modificaciones de su planta, ocasión en que todos concordaron que lo señalado con anterioridad constituía un avance.

No obstante siempre nos preocupó la modificación de la planta de Gendarmería que creaba el grado 26, el cual antes no existía y que permitía el ingreso de más funcionarios en la categoría de vigilantes. Al final me quedó la impresión de que habíamos dado un paso adelante en materia de modernización. Aunque han pasado aproximadamente cinco años desde esa situación, quiero saber si nuestros invitados estiman si se ha avanzado en ese ámbito.

Quizás aún falta mucho por hacer, pero ha habido asesores que, a mi juicio, han contribuido a esa modernización.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Juan Marechal.

El señor MARECHAL.- Señor Presidente, el establecimiento de la legalidad de los contratos es precisamente la razón por la que se constituyó esta Comisión, de manera que no es resorte de ninguna asociación decir si son o no legales.

Con respecto a la efectividad de las asesorías, por supuesto que convengo en que hay profesionales calificados cuyos servicios no sólo son necesarios en Gendarmería, sino que en cualquier otro organismo del ámbito nacional, respecto de los cuales las reparticiones públicas están ávidas de sus conocimientos, razón por la que son requeridos dentro de la administración pública.

En cuanto a si las asesorías han sido efectivas en Gendarmería, creo que en su momento fueron necesarias, como en 2005, con motivo de la Reforma Procesal Penal, puesto que hubo que asesorar al servicio frente a los cambios que se producirían. Lo mismo ocurrió una vez que se puso en marcha la ley de Responsabilidad Penal Juvenil, caso en el que también se necesitaron los conocimientos de profesionales externos, debido a que los funcionarios del servicio no contaban con ellos.

Creo que algunas asesorías efectivamente se efectuaron -sin calificar si fueron o no efectivas-, pero nadie puede asegurar nada, porque, como dije al principio, es tarea de esta Comisión determinar si fueron legales, si se hicieron y en qué términos.

Si bien lo anterior no es resorte nuestro, podemos decir, en concordancia con lo que aquí hemos señalado, que si algunas asesorías se hicieron fueron de muy mala calidad.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Cristián Alvear.

El señor ALVEAR.- Señor Presidente, respecto de si nos consta que hubo irregularidades en los contratos, debo señalar que si los antecedentes pasaron por la Contraloría el tema en cuestión no dice relación con su legalidad. Si bien no tenemos los elementos de prueba como para afirmarlo o desmentirlo, desde el punto de vista ético, este tema es cuestionable, por cuanto -lo digo como ingeniero comercial, no como oficial penitenciario- toda asesoría debe tener un impacto conocido por la organización. Porque una asesoría se hace cuando no se conocen los contratos. Ese conocimiento, que no tengo, se debe aplicar, en conjunto, en la

organización. Ése es el efecto y el impacto que debe tener cualquier asesoría que se contrate. Por algo se está pagando.

Me sumo a lo dicho respecto de que podemos entender y asumir grandes desafíos, como la implementación de la Reforma Procesal Penal o lo relativo a las cárceles concesionadas, a fin de que pudiese haber una asesoría en ese ámbito. Esto no nos consta, pero puede ser. Ninguno de nosotros sabía algo respecto de una cárcel concesionada, ni del gran proceso para modificar el sistema judicial chileno.

Como funcionarios de Gendarmería podemos decir categóricamente que estas asesorías no se conocían; ni tampoco se sabía que eran operativas. A lo mejor, fueron asesorías canceladas que no tuvieron el impacto esperado. Por eso, no se aplicaron.

En cuanto al tema de la asesoría de modernización, quisiera señalar que el costo del gendarme, de la planta II, antes de la ampliación de la planta de 2003, en relación con la posterior de 2003, significó que el funcionario de vigilancia de la planta II tenía un costo de menos de 32 mil pesos.

Antes de la planta del 2003, el gendarme valía, en términos económicos, más valor hora-hombre; después valió menos 32 mil pesos. Ese estudio se hizo en su minuto.

Sin embargo, modernización no significa crecer en infraestructura y en carros, sino en saber qué pasa con las personas y su capacitación.

De acuerdo con la ley de modernización, el 1 por ciento de las remuneraciones totales debe estar en el presupuesto de capacitación del personal institucional, cualquiera sea en todas las plantas. Hoy, tenemos el 0,48 por ciento; ni siquiera el 1 por ciento a que nos obliga la ley de modernización. Tenemos el 0,48 y, con esos 360 millones de pesos, capacitamos a alrededor de 15 mil funcionarios.

Nuestro cuestionamiento se basa en que hoy es tal la escasez de funcionarios de Gendarmería que muchas de las capacitaciones no se realizan con personal de vigilancia. Porque no se puede obligar a la seguridad en los establecimientos penales. Por lo tanto, se priorizan otras funciones, que pueden ser muy atendibles. Pero eso resulta inexplicable.

Insisto en que la modernización pasa principalmente por el recurso humano. Muchos hemos estudiado carreras distintas, porque no tenemos una oferta institucional. No hay especialización ni un perfeccionamiento sistemático en la carrera funcionaria.

Recién decía que hay un funcionario con 20 años de servicios que nunca había recibido capacitación. Si hacemos una encuesta, puede que ésta sea hasta impactante, y después nos sorprendemos cuando vemos a un funcionario hablar y gesticular, a lo mejor, con una abierta contaminación delictual. Entonces, con recursos propios hemos estudiado esa modernización.

Si comparamos el estado de 1990 con el actual, por cierto podemos señalar que hemos avanzado, ya que tenemos mejor calidad de vida y una mayor infraestructura, y también mejores uniformes y elementos de seguridad. Pero eso no es sinónimo de modernización, ya que ésta significa respeto a todas las organizaciones, especialmente la que componen los funcionarios.

Creemos que falta trabajar con personas que conozcan el sistema. Creemos que en eso hay que poner el acento para modernizar el Servicio.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Sandoval.

El señor SANDOVAL.- Señor Presidente, me sumo a lo que se ha dicho respecto de la legalidad y la regularidad. Hoy tenemos 151 personas contratadas a honorarios. Por lo tanto, esto opera en la Administración Pública.

Respecto de los impactos de ese estudio, y si se hicieron o no, los dos presidentes ya han señalado cuál es el estado de las instituciones hoy.

Por lo tanto, el abandono histórico sufrido por esta institución, a pesar de los esfuerzos en materias, como concesiones y remuneraciones, consideramos que ha sido absolutamente insuficiente para paliar el déficit.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el señor Rivas.

El señor RIVAS.- Señor Presidente, hace poco la Universidad Diego Portales publicó el informe de los derechos humanos 2007. La más grande traba que tuvo para hacerlo fue que Gendarmería no pudo pasar la información y la denuncia se hizo pública.

A Gendarmería se le solicitó, por ejemplo, la cantidad de suicidios dentro de las cárceles y no fue habida porque no tenía personal para hacerla, ni la información.

En estos momentos no existe un archivo, a pesar de que cuenta con la carpeta penal más completa. Es decir, se encuentra una carpeta penal con todos los antecedentes y el historial de la persona privada de libertad. Sin embargo, se

le da poca importancia a los archivos que son una necesidad no sólo profesional, sino también académica.

En las universidades se está impartiendo la carrera de criminología y no se puede estudiar esa carrera si no se tiene un archivo judicial.

El filósofo francés Michel Foucault hace un estudio sobre la locura con archivos de 1700. Entonces, mi pregunta es: ¿se podría hacer lo mismo en Chile? No tenemos archivos ni siquiera de hace 10 años. Ésa es la importancia institucional que debemos darle.

Denunciamos que los gendarmes eran más baratos y se nos compara con Carabineros quienes reciben mucho menos que nosotros. Sin embargo, en Prosegur hay gente que está siendo contratada con sueldos de 400 mil pesos hacia arriba.

Hay un desfase entre el área privada y el área pública.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda.

El señor SEPÚLVEDA (don Roberto).- Señor Presidente, en primer lugar, deseo saludar a los representantes de las tres agrupaciones gremiales que están compartiendo con nosotros.

Es importante conocer su visión, porque, sin duda alguna, es la que tiene el común de la gente respecto de Gendarmería y digámoslo claramente, es negativa. ¿Por qué es negativa? Porque lo que destaca la prensa a través de presuntas asesorías políticas, reportajes de televisión que dan cuenta del hacinamiento de la población penitenciaria, de las riñas intrapenitenciarias, cuando el culpado da muerte, de eventuales actos de corrupción de alguno de sus miembros, etcétera, es una realidad.

También estamos conociendo la cara interna, la que nos revela que en general hay funcionarios sacrificados, abnegados que trabajan en condiciones extremadamente difíciles, con una sobrepoblación que los sobrecarga laboralmente, que los estresa como personas, con falta de capacitación. Ha habido consenso en las tres asociaciones que señalan que no hay una política de capacitación al recurso humano, que hay carencia de elementos de seguridad para que los funcionarios trabajen en mejores condiciones y, obviamente, todo esto se traduce en una mala gestión penitenciaria.

Como Comisión estamos investigando esas asesorías, y no está en discusión su legalidad, porque el director de Gendarmería tiene las atribuciones para contratar asesores.

Lo que está en cuestionamiento es la veracidad, es decir, si se prestaron o no, si se justificaban y el eventual impacto que tuvieron.

Quiero resaltar ese punto porque vi todos los contratos y se habla de especialistas. Me cuesta entender que haya un egresado de derecho especialista en algo si recién está comenzando a formarse en su carrera profesional.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero solicitar el listado de asesores y de las personas o instituciones que certificaron la especialidad de cada uno de ellos. Insisto, porque soy parte querellante de dos personajes que la opinión pública conoció: de doña Catalina Depassier Smith, que prestaba asesoría en la municipalidad de Maipú, cobrando un millón y medio de pesos mensuales y que reconoció que iba ocasionalmente algunos viernes y sábados -la Contraloría le está haciendo devolver ese dinero-, y de Gonzalo Sánchez García-Huidobro. Nunca nadie lo vio en la municipalidad de Maipú, la que le pagaba aproximadamente dos millones seiscientos mil pesos mensuales. En ese caso la Contraloría demostró que esta persona jamás emitió un informe trimestral. Finalmente, el organismo determina que el hecho que motivó su contratación sigue existiendo. De modo que no normalizó absolutamente nada.

Por los motivos expuestos, es muy relevante para mí que Gendarmería pueda certificar la especialización de estos asesores. Así veremos si esas asesorías se justificaban, si tuvieron impacto, sobre todo teniendo en cuenta las deplorables condiciones económicas que afectan a los funcionarios de gendarmería.

Nos hemos dado cuenta de que los funcionarios de la institución, hace cuatro años, partían con el grado 22, hoy lo hacen con el 26, con cuatro grados menos. Además, se les cambió su condición de egreso, de gendarmes a vigilantes, con un grave deterioro de su calidad funcionaria.

En la medida en que vayamos avanzando -por eso es bueno tener las opiniones de las asociaciones-, es necesario clarificar el objetivo final por el cual se forma esta Comisión, que no es otro que investigar si esas asesorías, efectivamente, se justificaban, si hubo manipulación política, y cuál es el impacto que tuvieron en la institución.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Vamos a despedir a nuestros invitados. Nos quedan siete minutos. Agradecemos a las tres asociaciones por haber venido y que hayan podido hacer sus presentaciones.

Respecto al oficio que ha solicitado el diputado Sepúlveda, el mandato de esta Comisión es amplio, vago, indeterminado y extenso en el tiempo, pero claro y preciso porque dice que son los eventuales pagos de irregularidades en remuneraciones y honorarios que se hayan efectuado en diferentes instituciones, dentro de ciertos plazo, empezando por las instituciones dependientes del Ministerio de Justicia. A eso tenemos que abocarnos. Durante el camino tenemos que ir precisando de lo que hablamos.

Quiero señalar que me han parecido muy satisfactorias las exposiciones de hoy, pero, la primera fue de una asociación gremial y duró cincuenta minutos. Realmente, estaba fuera del objeto de la Comisión.

El diputado Vargas me planteaba -y entiendo que lo va a presentar formalmente la próxima semana-, ir a visitar cárceles. Considero que eso también está lejos del objeto de la Comisión.

El mandato es tan amplio que si no centramos el foco en alguna parte, podemos terminar enredados en nuestro propio camino.

Partimos por Gendarmería porque intuimos que allí hay un foco. Pero, podríamos haber comenzado por asesorías del Seremi de Hacienda de la Primera Región.

Tiene la palabra el diputado Roberto Sepúlveda.

El señor SEPÚLVEDA.- Señor Presidente, quiero precisar algo en relación con mi solicitud. En todos los contratos se habla de especialistas que asesoran a las diferentes unidades y jerarquías de Gendarmería. Entonces, quiero que Gendarmería dé cuenta de la profesión de cada uno de esos especialistas. La Contraloría es muy clara y categórica en la definición de especialistas. Entonces, para ir despejando el tema, quiero saber la profesión y especialidad que tienen estos asesores, porque cuando alguien me dice que va a trabajar en el tema de salud mental, imagino que por lo menos tendrá la profesión de psicólogo o psiquiatra y no de ingeniero comercial. Hacia allá va orientada mi petición.

El señor WARD.- Solicitamos toda esta información, desde 1990 a la fecha, no solamente en Gendarmería, sino que en todas la instituciones que dependen del Ministerio de Justicia. Gran parte de esa información ya llegó. En cada una de estas carpetas se analizan los contratos y la vinculación de las personas con cada institución. En la gran mayoría de los casos se señala la profesión, pero en otros no. Además

solicitamos toda la información de todos los asesores del gobierno en todos los ministerios desde 1990 a la fecha.

La puerta de entrada, en mi opinión, es Gendarmería. En esta institución se han dado a conocer asesorías cuestionables, como asimismo en el resto de las instituciones que dependen del Ministerio de Justicia. Llama la atención que aparezcan siempre los mismos nombres.

Esta información no está en poder de los medios de comunicación, sino que será entregada a la Comisión para formarnos una opinión respecto de si esto realmente era una práctica que ocurría dentro del Ministerio de Justicia o si lo ha sido hasta el 2003. Es información que existe y que haré llegar esta semana.

La señora MUÑOZ (doña Adriana).- ¿Es un delito que los gobiernos contraten asesores? Expreso esto porque no entiendo qué es lo que vamos a pesquisar.

El señor ESPINOSA.- Es delicado el tema de los asesores, porque no sabemos quién o bajo qué título se califica la condición de asesor de una persona.

Mi asesor es egresado de ciencias políticas. No es abogado ni tampoco cientista político. Desempeña bien su función y la realiza dentro un ámbito de competencias relativamente satisfactorio. Por lo tanto, emitir juicios de valor respecto de cuál es la condición para que un asesor, en un determinado servicio público, lo haga bien o mal, me parece que excede con creces el marco de competencias de esta Comisión.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- ¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión por cinco minutos?

Acordado.

Señores diputados, tenemos un mandato explícito respecto de cuál es el foco de nuestra investigación. Debemos determinar si existen responsabilidades políticas por eventuales pagos irregulares de remuneraciones y honorarios respecto de asesorías. Eso es lo que establece el mandato de esta Comisión.

Por lo tanto, el mandato no nos limita ni nos circunscribe a una institución en particular. Hemos acordado la semana pasada iniciar con la institución de Gendarmería. Con posterioridad, cualquiera puede plantear propuestas distintas.

Comparto lo que dice el diputado Espinosa en relación a no construir juicios respecto de que la contratación de una asesoría necesariamente está vinculada a

un pago irregular. Nuestra labor es verificar si el pago recibido es regular o no. Incluso podríamos investigar si la asesoría tuvo impacto o no.

Propongo suspender la petición de ese oficio, ya que el diputado Ward expresa que esa información estará a nuestra disposición. Es deseable contar con esa información antes del receso parlamentario para así poder analizarla y decidir si enviaremos otros oficios.

El señor CERONI.- Si queremos hacer un trabajo serio, la única forma de hacerlo es optando por un trabajo objetivo. Esta es una Comisión que evidencia una intencionalidad política demasiado notoria.

Podríamos decir por qué no se pidió esto antes. Este es un tema del Estado, de la forma en que en nuestro país se ha administrado el Estado y, obviamente, ahora estamos todos haciendo un esfuerzo para terminar con este tipo de cosas, con la transparencia que se está imponiendo en todos los actos de Gobierno con el nombramiento de personas a través de la Alta Dirección Pública. Quizás, son defectos que ha tenido nuestro sistema de gobierno, pero no ahora, sino siempre. Entonces, el tema es cómo lograr llevar esta Comisión a un buen puerto, desde el punto de vista más objetivo posible. Si nos abocamos a examinar todo lo que pueda haber en asesorías va a ser una locura y van a ser muy arbitrarias las opiniones que se puedan emitir, sobre todo porque han pasado por la Contraloría. En primer lugar, tendríamos que tener la información que ustedes tienen y ver cuáles son las cosas que, evidentemente, son notables para examinarlas en forma muy acuciosa y tener un pronunciamiento. Quizás, habría que detectar los más ejemplificadores. Asimismo, se pueden sacar algunas conclusiones que le sirvan al país más adelante en cuanto a qué medidas tomar.

El señor WARD.- Señor Presidente, aquí no hay ninguna motivación política, ni siquiera de carácter independiente. La Sala se pronunció respecto de la posibilidad de ampliar esta investigación hasta antes de 1990 y la rechazó en dos oportunidades.

Acá compartimos ciento por ciento el tema de las asesorías. No se trata de cuestionarlas per se. No tiene nada de malo y es algo que todos compartimos. El tema de la legalidad tampoco le corresponde verlo a esta Comisión. Lo que debemos determinar son responsabilidades políticas. La legalidad, la procedencia administrativa, el cumplimiento de los requisitos son analizados por la Contraloría a partir de una petición que hicimos junto al diputado Kast.

El señor CERONI.- Solicito una interrupción.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Tiene la palabra diputado Ceroni.

El señor CERONI.- Señor Presidente, ¿por qué insisto en este tema? Porque no podemos también caer en la situación -me preocupó lo que dijo el diputado Sepúlveda- de que de repente nos vamos a encontrar con casos de personas que honestamente fueron contratadas como asesores; a lo mejor, les desbaratamos todo y concluimos en que se tiene que devolver la plata a esa persona. No sé si me entiende. O sea, tenemos que tener casos ejemplarizadores para que en adelante el Estado modifique ciertas conductas.

Muchas gracias, señor diputado.

El señor WARD.- Señor Presidente, me parece razonable esa propuesta.

Quiero aclarar que acá no hay ninguna motivación de carácter legal en lo que tiene que ver con las responsabilidades, sino solamente de carácter político. Ahora, si quieren tener la información a disposición durante estas tres semanas y tomar la decisión en relación a quien invitar, ningún problema. Pero lo que yo temo es que, de alguna manera, con el Sename, el Servicio Médico Legal, el Registro Civil y el resto de las reparticiones ocurra lo mismo que sucedió con Gendarmería, esto es que la información llegue primero a los medios de comunicación. Ahí aparecen nombres cruzados, información en relación con los nombres que ya están en los medios de comunicación.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Perdón, señor diputado.

¿Habría acuerdo para prorrogar la sesión por cinco minutos?

Acordado.

El señor WARD.- Por eso, creo más oportuno seguir trabajando en la ventana que hemos abierto, que es Gendarmería, invitando, por ejemplo, a los directores Nacionales de Gendarmería, con un perfil mediano en la Comisión y no hacer desfilar todavía a los políticos de mayor envergadura. Creo que hay que seguir la línea que usted dice, Presidente; probemos hechos y, luego, los comentamos acá con ellos en la Comisión.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Soy partidario de seguir en esa línea. Efectivamente, si lo que buscamos es hacer un trabajo serio, no hacer de esta Comisión un show, entonces, tenemos que evitar que esto se convierta en un desfile injustificado de personas que por sí mismas tienen relevancia mediática. Para eso, tenemos que formarnos

un cuadro de lo que ocurrió. Sin embargo, diputado Ward, tengo una diferencia con usted, en cuanto a que el mandato es muy claro: investigar eventuales pagos irregulares. A partir de eso calificaremos si efectivamente hay responsabilidades políticas o no. La sola existencia de asesorías por sí mismas nos permite decir que hay algo que investigar, porque lo que estamos investigando son remuneraciones y asesorías. Entonces, en primer lugar, partamos por Gendarmería y, luego, sigamos con el resto de los servicios que usted ha planteado y los que otros diputados propongan, ello con el objeto de hacernos un cuadro claro de asesorías y remuneraciones que se han pagado, que, a juicio de miembros de esta Comisión, pueden generar dudas de que pudiésemos estar frente a una situación irregular.

Para concluir, propongo dos cosas: primero, esperar la información que nos pueda remitir el diputado Ward, que puede adelantar mucho de los oficios que la Comisión va a solicitar, y reiterar la invitación a la cuarta Asociación de Funcionarios de Gendarmería, ANFUG.

El señor CERONI.- Señor Presidente, no sé si será mejor escuchar al señor contralor ahora o más adelante.

El señor WARD.- Respecto del tema, envié en la lista de sugerencias de invitados, en el último lugar, al señor contralor, porque todavía están viendo el informe y nos va a decir que se encuentra en ello.

El señor CERONI.- ¿Y los directorios nacionales de Gendarmería? No sé si es bueno citarlos ahora o después. Pero ése es el orden que habría que seguir.

El señor WARD.- Señor diputado, disculpe. Yo tengo la lista. Se cita a las sesiones a los políticos que han sido vinculados a través de los medios y a los directores nacionales. En último término, al señor contralor.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Vamos a terminar con las cuatro asociaciones de funcionarios en octubre próximo.

El señor DÍAZ, don Eduardo.- Yo invitaría al director en ejercicio de Gendarmería.

Estamos llegando a los grandes y todavía no sé cómo pedirle que agilice el tema de los datos y de la información.

El señor CERONI.- Señor Presidente, sugiero que para la próxima sesión invitemos sólo a esa asociación y nos aboquemos a analizar los antecedentes que nos va a dar el diputado Ward, para que tomemos el camino más preciso.

El señor DÍAZ, don Marcelo (Presidente).- Muy bien.

Por haber cumplido con su objeto, se levanta la sesión.

-Se levantó la sesión a las 13.07 horas.

CLAUDIO GUZMÁN AHUMADA,

Redactor
Jefe de Taquígrafos de Comisiones.